

PARTE/S:	Proteco SA y otro s/L. 24769 - legajo de apelación
TRIBUNAL:	Cám. Nac. Penal Ec.
SALA:	A
FECHA:	06/03/2020
JURISDICCIÓN	Nacional

Buenos Aires, 6 de marzo de 2020.

VISTOS:

El recurso de apelación interpuesto por los defensores de I. J. E. R., a fs. 465/467 del principal (fs. 64/66 de este legajo) contra la resolución de fs. 453/464 de aquella causa (fs. 52/63 del presente), en cuanto por aquélla el señor juez a cargo del juzgado “a quo” dictó el auto de procesamiento del nombrado por la presunta comisión del delito de apropiación indebida de tributos, tipificado por el artículo 4 de la ley 27.430, y ordenó trabar embargo sobre los bienes de aquél en la suma de doscientos mil pesos (\$ 200.000).

El memorial de fs. 77/91 del presente, por el cual los recurrentes informaron por escrito en la oportunidad prevista por el artículo 454 del C.P.P.N.

Y CONSIDERANDO:

1º) Que, por la resolución recurrida el señor juez a cargo del juzgado de primera instancia dictó el auto de procesamiento, sin prisión preventiva, de I. J. E. R. por considerarlo autor penalmente responsable “...del delito de apropiación indebida de tributos, por los períodos diciembre de 2016 a marzo de 2017 (arts. 45 y 55 del CP; arts. 4 y 13 de la ley 27430; arts. 306, 310, 312 -a contrario sensu-del CPPN).”

Para arribar a la conclusión mencionada por el párrafo anterior, el señor juez “a quo” consideró que las sumas retenidas por R. en concepto del Impuesto a las Ganancias, más los importes retenidos en concepto del Impuesto al Valor Agregado, correspondientes a los

períodos mensuales mencionados por el párrafo anterior, superan la suma de \$ 100.000 que, por cada mes, prevé el artículo 4 de la ley 27.430, como condición objetiva de punibilidad.

En esa misma ocasión, dispuso trabar un embargo sobre los bienes de I. J. E. R. por la suma de doscientos mil pesos (\$ 200.000) a los fines de "...responder a las resultas del proceso y a la eventual reparación del perjuicio causado...".

2º) Que, por el recurso de apelación interpuesto a fs. 465/467 de la causa principal (fs. 64/66 de este incidente), la defensa de I. J. E. R. se agravio de la resolución recurrida señalando que la decisión "...cuestionada resulta errada y prematura...".

En ese sentido indica que el señor juez en su resolución "...no hace el más mínimo análisis..." respecto a la "...ausencia de dolo por la secuencia de pagos, lo que queda en evidencia por las fechas de cancelación de las sucesivas obligaciones supuestamente omitidas...".

También sostuvo la parte recurrente que "...la decisión de mérito valora las explicaciones de Rivarola desmereciéndolas, dando por hecho supuestos que no están probados y que, de hecho, requerían la sustanciación de medidas de prueba que no se valoraron...".

Los apelantes sostienen además que "...la decisión dio por cierta la existencia efectiva de la retención cuando no se ha producido ni una sola prueba que acredite cuándo se realizaron las mismas, el modo en que fueron pagadas las facturas que las generaron, su fecha efectiva, etc...". También señalan que "...las declaraciones juradas presentadas a través del SICORE no brindan ninguna información al respecto de manera tal que la decisión parte de premisas sin justificación y además, excesivamente formales...".

Por otra parte, indican que la decisión recurrida afirma que "...cualquier problema financiero o económico de ningún modo la habilitaba para apropiarse del dinero retenido a terceros, siendo que lo cierto es que la crisis no ha podido ser probada por la denegatoria infundada de la prueba ofrecida y la ausencia de cumplimiento del mandato de evacuación de las citas.

Lo mismo sucede con la evacuación de los saldos bancarios, los que resultan arbitrariamente ponderados, sin el análisis de los movimientos de caja y bancos y el destino de esos saldos y con la afirmación vacía de contenido en cuanto a que P. S.A. tenía la capacidad de actuar y no lo hizo...”, señalando “...que la elucubración acerca de la capacidad de pago vinculada con el análisis arbitrario de los ingresos es además de una afirmación en abstracto sin contenido cierto, una valoración anticipada de una realidad que se desconoce en el sumario y que justamente, debió probarse como lo reclamó nuestro cliente...”.

Por último la parte recurrente se agravia por considerar que “...el análisis de las compensaciones, sin perjuicio de ser errada la valoración de las normas administrativas que las rigen...”, desconoce el “...cuantioso saldo a favor de P. S.A. que el Fisco jamás le devolvió...” y que “...en este aspecto también, resulta contradictorio sostener que, reconocido que ha sido ese saldo a favor, la conducta de ingreso extemporáneo de montos retenidos, afecte el flujo de las arcas fiscales...”.

3º) Que, en primer lugar y antes de entrar a considerar los agravios de los recurrentes, corresponde expresar que, por el artículo 6 de la ley 24.769, con la reforma introducida por la ley 26.735, vigente al momento de los hechos investigados, se establece que: “Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el agente de retención o de percepción de tributos nacionales, provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no depositare, total o parcialmente, dentro de los diez (10) días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, el tributo retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado superase la suma de cuarenta mil pesos (\$40.000) por cada mes.”.

Por su parte por el art. 4 de ley N° 27.430, por el cual el señor juez de primera instancia ordenó el procesamiento de I. J. E. R., se establece que: “Será reprimido con prisión de dos (2) a seis años (6) el agente de retención o de percepción de tributos nacionales, provinciales o de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no depositare, total o parcialmente, dentro de los treinta (30) días corridos de vencido el plazo de ingreso, el tributo retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado, superare la suma de cien mil pesos (\$ 100.000), por cada mes”.

4º) Que, de la lectura de las normas transcriptas por el considerando anterior surge que las sumas de más de cuarenta mil pesos o de cien mil pesos fijadas por las disposiciones legales citadas en el considerando anterior, se refieren a cada tributo retenido o percibido por separado y no a la suma o acumulación de todos los importes tributarios nacionales retenidos y/o percibidos que no hayan sido depositados, precisamente porque aquellas normas son concretas al referirse al “...tributo retenido o percibido...” , es decir de manera singular e individual cada tributo, en contraposición al plural utilizado por aquellas para individualizar al posible autor del delito como el agente de retención o percepción de “tributos nacionales” (confr. Regs. Nos. 215/08, 339/09 y CPE 775/2017/1/CA1, res. del 4 de septiembre de 2018, Reg. Interno N° 728/2018 y CPE 775/2017/1/CA3, res. del 17 de abril de 2019, Reg. Interno 234/2019, todos de la Sala “B” de esta Cámara).

5º) Que, por otro lado, si el legislador hubiera querido que los montos de los distintos tributos nacionales se acumularan, así lo habría expresado de manera inequívoca y directa por las normas, para lo cual hubiera bastado con una referencia plural a “tributos retenidos o percibidos”. En efecto, es útil recordar que la inconsecuencia o la falta de previsión no se suponen en el legislador- confr. Fallos, 303:1.965; 304:794, 954,1.733, 1.820 y 1.822; 305:358 y 657; 306:721; 307:518- (confr. Reg. N° 190/03, entre muchos otros, de la Sala “B” de esta Cámara).

6º) Que, la primera fuente de exégesis de la ley es su letra, y cuando ésta no exige un esfuerzo de interpretación debe ser aplicada directamente con prescindencia de consideraciones que excedan las

circunstancias del caso expresamente contempladas en aquélla (Fallos 316:1247).

Por otra parte, y en el mismo sentido de lo expresado precedentemente, la interpretación de las normas penales debe ser particularmente prudente y restrictiva, teniendo presente la prohibición de extensión o ampliación de los tipos penales por analogía, la cual deriva del principio constitucional de legalidad (art. 18 C.N.).

7º) Que, en el mismo sentido establecido por la presente, por la doctrina se ha expresado: "...estimamos que la condición objetiva de punibilidad rige por monto y por régimen de cada tributo..." (confr. Jorge Enrique HADDAD, "Ley Penal Tributaria Comentada", Ed. Lexis Nexis, Bs. As. 2005, pág. 57) y "...Pensamos que la retención debe estar referida a un mismo impuesto, no a la sumatoria de varios, conforme a la hermenéutica de la ley, que...está precisando que los delitos se tipifican por cada tributo..." (confr. Miguel Ángel MACCHI "Sistema penal tributario y de la seguridad social", Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, Bs.As. 1999, pág. 204).

8º) Que, además la expresión en singular, relativa al "tributo retenido o percibido", se encuentra tanto por la redacción establecida por la ley 26.735 para el art. 6 de la ley 24.769, vigente al momento de los hechos a los que se refiere el auto de procesamiento recurrido, como por el texto del art. 4 del Régimen Penal Tributario aprobado por la ley 27.430, en función del cual el señor juez dispuso el auto procesamiento de I. J. E. R., de modo que, con respecto a las normas aludidas, no se advierten razones para apartarse del criterio interpretativo recordado precedentemente.

9º) Que, por lo demás, lo expresado por el pronunciamiento anterior de la Sala "B" de esta Cámara que se citó por la denuncia efectuada por la A.F.I.P.-D.G.I. obrante a fs. 1/9 de este legajo, el Registro Interno N° 41/2015 del 23 de febrero de 2015, no puede trasladarse, sin más, a este caso, pues el análisis efectuado en su momento por aquella resolución, en lo que interesa a la presente, giró en torno a

una imputación por el delito previsto por el art. 6 de la ley 24.769 que se sustentaba en una sumatoria de retenciones y de percepciones correspondientes a un mismo tributo.

10°) Que, conforme a lo reseñado precedentemente y en atención a que de la denuncia de la A.F.I.P-D.G.I de fs. 1/9, de los requerimientos fiscales de instrucción de fs. 14/16 vta. y fs. 17/18 vta. y de la resolución recurrida a fs. 52/63, todas de este incidente, se advierte que los montos correspondientes a supuesta retención del Impuesto a las Ganancias, que habría sido efectuada durante los períodos fiscales de enero, febrero y marzo de 2017, por las sumas de \$ 12.195,52; \$ 24.323,28 y \$ 4.089,20, respectivamente, cuya omisión de depósito se atribuyó a I. J. E. R., una vez deducidas las sumas presuntamente retenidas por aquél en concepto al Impuesto al Valor Agregado, en principio, no superan la condición objetiva de punibilidad establecida para penalizar la apropiación indebida de tributos tanto por el artículo 6 de la ley 24.769, con la reforma introducida por la ley 26.735, vigente al momento de los hechos investigados, como por art. 4 de ley 27.430, por el cual el señor juez de primera instancia ordenó el auto de procesamiento de I. J. E. R.

No obstante lo expuesto en el párrafo que antecede, esa cuestión debe ser objeto de la resolución que, en su caso y por tratarse de hechos independientes, le corresponda dictar al señor juez “a quo”, cuestión de la cual no le compete a este Tribunal emitir opinión en el marco de este incidente.

11°) Que, sentado lo expuesto por los considerandos anteriores, cabe indicar que el agravio de los recurrentes con relación a que la posterior cancelación de las sucesivas obligaciones demuestran la ausencia de dolo en la conducta de su defendido, no resulta admisible. En efecto, las omisiones de depositar en tiempo oportuno las sumas retenidas en concepto del Impuesto al Valor Agregado, correspondiente a los períodos fiscales de diciembre de 2016 y enero, febrero y marzo de 2017, se configuran objetivamente con la omisión de ingresar al fisco los importes retenidos, dentro del plazo

establecido por ley y la alegación de que la omisión no fue intencional por haberse efectuado el depósito de la totalidad de los aportes retenidos después de transcurrida la fecha de vencimiento legalmente prevista, no incide de la forma pretendida por la defensa, ya que la reiteración de ese mismo comportamiento, en principio, descarta que se trate de una situación excepcional que no hubiese sido dolosa. El argumento referido a que con posterioridad a la consumación de los hechos, los importes retenidos habrían sido finalmente depositados, no modifica la estimación acerca de la configuración del delito que se atribuye al imputado.

12°) Que la parte recurrente también indicó que no se valoraron las explicaciones de I. J. E. R., dando por hecho supuestos que no están probados y que requerían la sustanciación de ciertas medidas de prueba solicitadas.

Al respecto, corresponde señalar que, sin perjuicio de que las partes pueden proponer diligencias al director de la investigación, "...El juez las practicará cuando las considere pertinentes y útiles; su resolución será irrecurrible..." (artículo. 199 del C.P.P.N.) (confr. CPE 536/2016/35/CA2, res. del 25 de abril de 2017, Reg. Interno N° 166/2017, CPE 803/2013/22/CA8, res. del 19 de junio de 2018, Reg. Interno 461/2018 y CPE 171/2016/31/RH3, res. del 28 de febrero de 2019, Reg. Interno N° 88/2019 de esta Sala "A", con distinta integración a la actual).

Esto es así, pues "...la actividad del juez es técnicamente discrecional, queriéndose significar con ello que, a diferencia de lo que ocurre durante el plenario -el juicio oral-, está concentrada sólo en las disposiciones del instructor...Es que la pertinencia de la prueba, calificándola como necesaria a los fines de la investigación, incumbe sólo al juez...Resulta del carácter escasamente contradictorio de esta etapa..." (confr. Reg. N° 136/12; CPE 237/2013/7/RH1, res. del 8/9/2015, Reg. Interno N° 385/15; CPE 1674/2014/1/RH1, res. del 6/6/2016, Reg. Interno N° 266/16 y CPE 759/2016/1/RH1, res. del 9/3/2017, Reg. Interno N° 115/2017, de la Sala "B" de esta Cámara).

En este sentido, cabe expresar que en la etapa de instrucción los jueces no están obligados a producir todas las medidas de prueba solicitadas por las partes, sino sólo las que estimaran pertinentes y útiles a fin de "...comprobar si existe un hecho delictuoso mediante las diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad (art. 193 del C.P.P.N.)" (confr. Regs. Nos. 664/01, 701/02, 722/04, 136/12; CPE 237/2013/7/RH1, res. del 8/9/2015, Reg. Interno N° 385/15; CPE 1674/2014/1/RH1, res. del 6/6/2016, Reg. Interno N° 266/16 y CPE 759/2016/1/RH1, res. del 9/3/2017, Reg. Interno N° 115/2017, de la Sala "B" de esta Cámara).

13°) Que, por otra parte, los apelantes critican lo resuelto por el señor juez de primera instancia indicando que en su resolución da por cierta la existencia efectiva de las retenciones cuando no se ha producido ni una sola prueba por la cual se acredite cuando aquéllas se realizaron, el modo en que fueron pagadas las facturas que las generaron y su fecha efectiva. También señalan que las declaraciones juradas presentadas a través del SICORE no brindan ninguna información.

En ese sentido, la existencia de las retenciones surge, con el alcance de la presente etapa procesal, de las constancias incorporadas a la causa principal. En efecto, las declaraciones juradas presentadas por la contribuyente (confr. fs. 252, 253, 254, 255 del principal) y los certificados de retención suscriptos por I. J. E. R., dan cuenta de que las retenciones habrían sido efectuadas y declaradas ante el fisco (conf. fs. 33, 46, 52, 76, 78, 81, 83 y 108 de la Actuación N° 18.269-132-2019 de la A.F.I.P. reservada en Secretaría).

Por otra parte, la forma en que fueron abonadas las facturas emitidas por los proveedores de la sociedad anónima contribuyente y que generaron las retenciones que esa empresa habría efectuado y no depositado en tiempo oportuno, no inciden en la configuración del hecho investigado.

En efecto, habiéndose practicado las retenciones del Impuesto al Valor Agregado a las cuales se hizo mención anteriormente, surge

para el responsable de P. S.A. el deber de ingresar al fisco nacional aquellos importes al vencimiento del plazo general de ingreso, el cual no se cumplió, quedando las sumas retenidas indebidamente en poder de aquel agente de retención y evidenciando aquella circunstancia, asimismo, la posibilidad de hecho de llevar a cabo la conducta debida. Las circunstancias mencionadas no se encuentran controvertidas en estas actuaciones.

Al respecto, cabe señalar que, si bien el imputado R. en su descargo destacó que en realidad no se habían practicado las retenciones denunciadas, sino posteriormente, pues las operaciones celebradas con sus proveedores fueron canceladas con cheques de pago diferido, esa forma de pago no tiene injerencia alguna sobre la retención, y las constancias de la causa principal, evidencian que las operaciones comerciales que motivaron las retenciones, ocurrieron en los meses de diciembre de 2016 y enero, febrero y marzo de 2017 y que las retenciones fueron practicadas en esos meses, como se consignó en los certificados de retención respectivos.

En efecto, con relación a que las operaciones fueron abonadas mediante cheques de pago diferido, ello en nada modifica la fecha en que fueron practicadas las retenciones, ya que los cheques habrían sido emitidos por los importes netos, es decir, con las retenciones del Impuesto al Valor Agregado ya practicadas. Por ejemplo, de los importes por los que fueron emitidos los recibos de los proveedores C. C. S.R.L. y S. D. N. S.R.L., surge que del total que de aquéllos debía abonar P. S.A. fueron descontadas las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (confr. respecto de C. C. S.R.L. la documentación obrante a fs. 42, 47 y 49 de la Actuación N° 18.269-132-2019, de la A.F.I.P. reservada en Secretaría, y respecto de S. D. N. S.R.L., la documentación obrante a fs. 107, 108 y 110 de la aquella misma actuación).

En efecto, por la mecánica propia del sistema de retenciones, quien tiene la obligación de actuar como agente de retención materialmente retiene los importes respectivos desde el momento en que abona la

operación comercial de que se trata, y no traslada el dinero respectivo del impuesto retenido.

Debe tenerse presente que el delito se consuma, en su faz objetiva, en el preciso momento en que la conducta exigible debió llevarse a cabo, y no fue ejecutada (C.S.J.N. 320:2271 -en relación con el artículo 8° de la ley N° 23.771, de similar estructura al tipo previsto por el artículo 9° de la ley 24.769-; C.N.P.E., Sala “B” de esta Cámara, Regs. N° 251/00 y 499/02; T.O.P.E. N° 2, “Abrate, Oscar Abel s/inf. Ley 23.771” del 19/06/97; MACCHI, Miguel Ángel, “Sistema Penal Tributario y de la Seguridad Social”, Ed. Abaco, Bs. As., 1998, pág. 208 y THOMAS, Ricardo, “Régimen Penal Tributario Ley 24.769”, Ed. AD - HOC, 1997, pág. 67).

14°) Que, por otra parte, los apelantes indican que la decisión recurrida afirma que cualquier problema financiero o económico de ningún modo la habilita para apropiarse del dinero retenido a terceros, siendo que la crisis de la contribuyente P. S.A. determinó que el flujo de fondos fuera manejado por orden de prioridades y de urgencias de la empresa y que la misma no ha podido ser probada por la denegatoria infundada de la prueba ofrecida y la ausencia de evacuación de las citas efectuadas por su defendido al ser indagado. También indican que lo mismo sucede con el análisis de los saldos bancarios, los que resultan arbitrariamente ponderados y con la afirmación vacía de contenido en cuanto a que P. S.A. tenía la capacidad de actuar y no lo hizo.

Al respecto, la obligación de depositar aquellas sumas proviene de la calidad de agente de retención asignada por ley. Por lo tanto, las sumas retenidas no pueden disponerse libremente con la intención de solventar otras obligaciones de la sociedad, como el pago de salarios o el cumplimiento de las obligaciones debidas a los proveedores, ni asignarse a aquellas sumas un destino distinto del previsto por la norma. Además la crisis que podría haber sufrido la sociedad anónima contribuyente no la habilita para apropiarse del dinero retenido a terceros.

Por otro lado, conforme surge del detalle efectuado en la denuncia presentada por la A.F.I.P.-D.G.I. y de lo reseñado por el considerando 13° de la resolución recurrida, la contribuyente P. S.A. habría tenido suficiente disponibilidad de fondos para depositar las retenciones efectuadas al momento de los hechos investigados ya que los saldos de su cuenta del Banco de la Nación Argentina superaban los montos del Impuesto al Valor Agregado que habrían sido retenidos y no depositados; y también surge que en los períodos investigados la firma comercial antes mencionada habría efectuado erogaciones por montos significativos.

En definitiva, no ha quedado descartado que, practicadas las retenciones, la contribuyente contara con la posibilidad concreta de cumplir con el ingreso de aquellos importes al organismo recaudador, ya que habría tenido un flujo de fondos suficiente durante los períodos investigados en autos, que le permitía hacer frente a las obligaciones fiscales inherentes a su calidad de agente de retención.

De tal manera, se evidencia que P. S.A. habría tenido disponibilidad de fondos, entre la fecha de vencimiento de las obligaciones investigadas y el día en que debía cumplir con aquéllas para hacer frente a la obligación tributaria y, sin embargo, eligió conservar los importes que habría retenido para destinarlos a cubrir obligaciones distintas.

Por lo demás, "...por tratarse de un delito de omisión, lo que se requiere es que los imputados hayan tenido la posibilidad de cumplir con la obligación...de realizar aquellos depósitos en término (posibilidad de actuar), aunque para ello haya sido necesario efectuar previsiones, y no que hayan tenido excedentes de caja disponibles en las fechas establecidas para los depósitos, pues omite dolosamente tanto el que no cumple porque no quiere, pudiendo hacerlo, como el que no cumple como consecuencia de haber realizado gastos que le impidieron cumplir oportunamente con el mandato legal..." (confr. Reg. Int. 520/2017 y 311/2019, de la Sala "B" de esta Cámara).

15°) Que, por último, en cuanto al agravio de los recurrentes respecto a que la valoración efectuada por el señor juez de primera instancia con relación a las normas administrativas que regulan la compensación del saldo que a su favor tenía la sociedad anónima P., persona jurídica que preside Ignacio José Enrique R., resulta errada y a que aquél saldo no fue devuelto por el fisco, corresponde señalar que si bien la Resolución General N° 1658/04, a la que se refieren los recurrentes en su argumentación, habría permitido la compensación de los importes retenidos con la existencia de saldos a favor de los responsables por el cumplimiento de deuda ajena o de los responsables sustitutos, aquella norma fue modificada por la Resolución General N° 3175/2011, la cual y en lo que interesa en este caso, establece en forma expresa en su artículo 1° que: "...Los responsables por el cumplimiento de deuda ajena y los responsables sustitutos a que se refiere el Artículo 6° de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, no podrán solicitar la compensación a que alude la presente..." (el resaltado pertenece a la presente).

Por lo demás, no obstante la controversia suscitada con relación a si asiste o no el derecho a compensar lo retenido, lo cierto es que la compensación argumentada no es automática y la conducta de la contribuyente no fue orientada a aquel fin, en tanto no habría reclamado esa compensación ante el organismo recaudador ni antes ni después de que operara el vencimiento de las obligaciones omitidas. Esa actitud se encuentra en contraposición con la conducta asumida al efectuar el pago de lo adeudado, aunque tiempo después de que opere su vencimiento.

En esas condiciones, aquel agravio de la defensa de I. J. E. R., tampoco resulta atendible.

16°) Que, en consecuencia, lo reseñado precedentemente resulta suficiente para sustentar el auto de procesamiento de I. J. E. R. por considerarlo autor del delito de apropiación indebida del Impuesto al Valor Agregado, correspondiente a los períodos fiscales diciembre de

2016, enero, febrero y marzo de 2017, por las sumas de \$ 118.944, \$ 138.958,08, \$ 236.760,66 y \$ 221.483,84, sin que los argumentos de la defensa logren modificar aquella estimación.

17º) Que, para finalizar, corresponde dejar sentado que si bien el señor juez “a quo” dictó el auto de procesamiento de I. J. E. R., por considerarlo autor penalmente responsable del delito de apropiación indebida de tributos, previsto por el artículo 4 de la ley 27.430, esa norma legal no se encontraba vigente al momento de los hechos ya que, en ese entonces y respecto de aquel delito, regía el artículo 6 de la ley 24.769, con la modificación introducida por la ley 26.735.

Sin perjuicio de ello, esa cuestión no tiene incidencia respecto del auto de procesamiento recurrido. En efecto, en la medida en que los hechos presuntos de apropiación indebida del Impuesto al Valor Agregado por los cuales se dictó el auto de procesamiento de I. J. E. R. se relacionan con sumas retenidas que superan las condiciones objetivas de punibilidad establecidas tanto por la ley vigente al momento de los hechos -la ley 24.769, texto según ley 26.735- como por ley que posteriormente la modificó -la ley 27.430-, resulta innecesario establecer en este momento del proceso y a los fines de sustentar concretamente un pronunciamiento de aquel tipo, si los hechos deben ser analizados, o no, desde la perspectiva de una ley que entró en vigencia con posterioridad al momento de la comisión presunta de aquellos sucesos.

Expresado de otra manera, en situaciones como las aludidas, aquella definición “...carece de trascendencia, pues lo fundamental resulta ser la determinación referente a la procedencia o la improcedencia de la medida, en los términos del art. 306 del código adjetivo ya que la calificación recaída en este tipo de pronunciamientos no causa estado, no es vinculante para el Ministerio Público, ni condiciona un eventual cambio de calificación en el requerimiento de elevación a juicio y en la sentencia definitiva (conf. Regs. 426/00, 243/06 y 182/07, entre otros de la Sala ‘B’ de esta Cámara y 7/12, 72/12, 251/12, 288/12, 533/12, 627/12 y 689/12 de la Sala ‘A’...”), con distinta integración a la

actual (confr. CPE 701/2017/20/CA7, res. del 21/05/18, Reg. Interno N° 315/18 y CPE 269/2018/8/CA3, res. del 29/06/18, Reg. Interno N° 488/18, de la Sala “B” de esta Cámara).

18°) Que, debido a que por el recurso de apelación interpuesto por la defensa de I. J. E. R. a fs. 465/467 de la causa principal (fs. 64/66 de este incidente) no se introdujo agravio autónomo alguno con relación a la decisión del juzgado “a quo” de disponer el embargo sobre los bienes de aquél, corresponde declarar mal concedido el recurso de apelación deducido con relación a aquella decisión (confr. arts. 445 y 450 del C.P.P.N.).

Por ello, SE RESUELVE:

I. CONFIRMAR la resolución recurrida en cuanto dispuso el auto de procesamiento de I. J. E. R. con el alcance indicado por los considerandos 3° al 10° de la presente resolución, por los hechos objeto de este pronunciamiento (confr. considerando 11° de la presente).

II. CON COSTAS, en la medida de lo resuelto (arts. 531, 532 y ccs. del C.P.P.N.)

III. DECLARAR PARCIALMENTE MAL CONCEDIDO el recurso de apelación interpuesto por los defensores de I. J. E. R. a fs. 465/467 de la causa principal (fs. 64/66 de este incidente), contra la decisión del juzgado “a quo” de disponer el embargo sobre los bienes de aquél.

Regístrese, notifíquese y devuélvase junto con los autos principales y la documentación reservada en Secretaría.

JUAN CARLOS BONZON

JUEZ DE CAMARA

ROBERTO ENRIQUE HORNOS

JUEZ DE CAMARA

CAROLINA L.I. ROBIGLIO

JUEZ DE CAMARA

ANTE MI

GUILLERMO C. SUSTAITA

SECRETARIO DE CAMARA